



CARMEN LA MIXTECA, MÉXICO, 1992. FOTOS: GRACIELA ITURBIDE

Cuando los pueblos ganan

LaJornada
Ojerasca
Suplemento mensual. Número 160. Agosto 2010

- Atenco, el sabor de la libertad
- Mayas de Belice • Misak de Colombia
- Rankülche de Argentina • Histórica marcha indígena en Bolivia • Amazónicos expulsan a USAID
- Los verdaderos guardianes de los alimentos
- En el corazón del hambre: poema de Martín Espada
- México según Graciela Iturbide

Cuando los pueblos ganan

Con tantos fantasmas de mala fama que recorren hoy México y América Latina, pasa desapercibido un fantasma distinto que también recorre nuestras tierras: el de las victorias de los pueblos. Porque demasiado acostumbrados a las penurias y las denuncias –discursos de “combate a la pobreza extrema”, desastres sanitarios, mala educación-, se nos escapan las buenas noticias. Los pueblos, sus luchas de resistencia, sus autonomías, también la hacen.

Por primera vez en 500 años, los pueblos de América vencen en continuas de importantes batallas. En esta hora de naufragio del Gran Capitalismo y la amenaza de algo peor, podemos decir que quién sabe quién va ganando, pero los movimientos indígenas no son los que van perdiendo.

En el hemisferio americano, la guerra y la persecución contra los pueblos indígenas se repite de norte a sur bajo disfraces distintos pero con las mismas intenciones; despojarlos, diezmarlos, integrarlos, exportarlos.

De la Tarahumara a las montañas de Chiapas, por toda Guatemala, Belice, Honduras; en Colombia, Perú, Chile, las Amazonas. Los poderes del poder van por todo. El lector de *Ojarasca* estará acostumbrado a estas informaciones.

En el corto y el mediano plazo sin embargo, los triunfos, logros, avances de los pueblos, están a la vista. La autonomía rebelde en Chiapas. La extraordinaria efervescencia de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia, donde nadie puede gobernar sin ellos. La valentía constante de los mapuche en el extremo sur. La claridad política y la dimensión universal alcanzada por los pueblos andinos contemporáneos.

Este mes *Ojarasca* documenta algunas de estas victorias, más allá del milagro de la sobrevivencia. Donde la tierra, la ley de los propios pueblos ancestrales y sus lenguas imponen sus condiciones. Pudimos incluir en este mes muchas otras historias. Tan sólo en las recientes semanas se registraron hechos relevantes: en su diferendo con el gobierno de Rafael Correa, Conaie y Ecuarrunari determinaron que en adelante, ya que el gobierno quiere combatirlos también en los tribunales, acusándolos de terroristas (a la Pinochet), utilizarán su lengua, el kichwa, para defenderse.

Los mapuche conquistaron en Chile la oficialización de su lengua, y se anotaron un triunfo en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt contra la empresa salmonera Los Fiordos, que es histórico pues se basa en el Convenio 169 de la OIT y crea precedente. Mientras, el pueblo rapa nui se sublevó pacíficamente en agosto, tomó la sede del gobierno en la Isla de Pascua y exigió al Estado chileno la devolución de sus tierras; de lo contrario se unirá a Polinesia, según determinó el Parlamento Rapa Nui.

Las mujeres de Tatahuicapan, en Veracruz, realizaron una protesta ocupando y cerrando el flujo de grandes represas, y obligaron al gobierno a escucharlas. En la Amazonía peruana los pueblos indígenas han frenado a las transnacionales petroleras.

Los logros son jurídicos, territoriales, culturales, de formas de buen gobierno, de autosuficiencia alimentaria y libre determinación. En una época que la Tierra misma necesita ser cuidada, salvada, recobrada, los pueblos de América saben cómo, lo enseñan al mundo y lo practican en su lucha cotidiana.

Este mes hablan aquí los mizak de Colombia, los mayas de Belice, los campesinos de Atenco, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y los rankülche de Argentina. Unos ejemplos.

Del pueblo rankülche en La Pampa

Basta ya de traición del Estado argentino

Con el mayor de los respetos por nuestros hermanos que decidieron aceptar ser denominados así, no somos ni seremos “mapuche”, porque somos rankülche, y estamos orgullosos de serlo. El despojo de nuestras tierras en el siglo XIX no fue el triunfo de la civilización sobre la barbarie, sino la apropiación de tierras por y para unos pocos a costa de una nación, habitante desde tiempos inmemoriales del centro de la actual república argentina, que no sólo quería vivir en paz sino que fue parte crucial, decisiva, aportando hombres y caballos para el ejército de San Martín que liberó Chile y Perú. Además se negó a firmar un tratado con los españoles, que a través de su territorio querían recuperar Buenos Aires.

Si lo firmó en cambio con las Provincias Unidas en Sudamérica, transformándose en la primera nación soberana en reconocer al gobierno patrio. Traicionada, al igual que aquellos primeros patriotas, el pago que recibió fue el despojo de su territorio por testarferos que obedecían órdenes provenientes del otro lado del mar. Así siguió, así siguen, Argentina y el continente. Latifundistas, terratenientes, multinacionales, además de llevarse todo lo que posea algún valor, hoy vienen por lo poco que nos queda, con la complicidad de gobiernos cómplices por acción u omisión.

La tierra que poseemos no servía para nada, apenas para que un indio pudiera subsistir. Hoy está teniendo algún valor. Y allí están los cuervos, que nunca dejaron de sobrevolarlos, dispuestos a abalanzarse sobre ella. Pero ahora no les va a ir bien. Estamos organizados. Tenemos leyes que nos costó mucho hacer aprobar, como la misma Constitución. No se aplican, pero están. Son operativas. La justicia nos da la razón. No pode-

mos, no debemos, no vamos a ceder. Porque además estamos unidos.

Mal que les pese a los muchos intentos que han hecho y se siguen haciendo para dividirnos, seguimos juntos. Y cada vez somos más. Esto es un hecho irrevocable e irreversible que nos permite afirmar: “Basta, no nos provoquen. No queremos cometer el mismo error que cometieron sus antepasados. Queremos convivir. Las circunstancias actuales así lo exigen”.

No es justo que por la apatencia de unos pocos, como ocurriera en 1878, sufran las consecuencias muchos. Para aquellos que no están compenetrados en la historia, les hacemos saber que sostenemos esto considerando los tratados firmados entre nuestra nación y el Estado argentino que nos reconocía como nación soberana, sumado a que fuimos atacados sorpresivamente estando en vigencia un Tratado de Paz. Que la Constitución de 1853 decía “conservar el trato pacífico con los indios”. Que se apropiaron de nuestro territorio sin nuestro “consentimiento libre e informado”, y por lo tanto en forma ilegal. Que jamás capitulamos.

Si Argentina se cree con derecho a reclamar el territorio de la Islas Malvinas por considerar que las posea en el tiempo en que Inglaterra las usurpó, el mismo derecho nos cabe a la nación rankül respecto a nuestro territorio. Casualmente, el diálogo que Argentina reclama a Inglaterra es el mismo que venimos reclamando al Estado argentino. Y obtenemos la misma respuesta: silencio. Por lo tanto, a los potenciales usurpadores, les decimos: no sigan tirando de la cuerda. Ésta puede llegar a cortarse.

Germán Canuhé

Rankül, La Pampa, Argentina, junio de 2010.

Las fotos de este número son del libro *Graciela Iturbide*, Tí editores, Madrid, 2005.

La Jornada

Directora General: Carmen Lira Saade
Publicidad: Marco Hinojosa.

Ojarasca en La Jornada

Dirección: Hermann Bellinghausen
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera
Edición: Gloria Muñoz Ramírez
Fotografía y Diseño: Yuriria Pantoja Millán
Caligrafía: Carolina de la Peña
Retoque fotográfico: Alejandro Pavón • Asesoría técnica: Francisco del Toro

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, cp. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en *Ojarasca*, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en Imprenta de Medios, SA de cv. Av. Cuauhtémoc 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

Atenco, el sabor de la libertad

(y CONAGUA, la nueva amenaza)

Marcela Salas y Sergio Castro. San Salvador Atenco, Estado de México. Cuatro años recluso en el Penal del Altiplano, lugar donde se encuentran presos los delincuentes más peligrosos del país, no lograron que Ignacio del Valle ni el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) abandonaran su lucha contra el proyecto aeroportuario que el gobierno pretende realizar arrebatándoles su territorio.

“La mayoría de nuestra gente, nuestras mujeres, se mantuvieron en pie de lucha y el resultado es que aquí estamos. Seguimos en resistencia. No queremos ningún aeropuerto, ningún proyecto del gobierno porque sabemos que sólo lo quieren para obtener ganancias que no serán en beneficio de la mayoría”, explica Ignacio del Valle mientras camina por las tierras que ha defendido el FPDT durante más de diez años.

Del Valle y otros 11 hombres de Atenco estuvieron presos desde mayo de 2006 y, gracias a la incansable lucha del Frente y al apoyo de múltiples instancias nacionales e internacionales, recuperaron su libertad el pasado primero de julio.

“Por defender la tierra que nos corresponde nos llaman criminales, nos apresan, nos meten a la cárcel y nos dan 112 años de prisión, más 7 averiguaciones. La idea era exterminar y dar un escarmiento para que no se repitiera esto en otro lugar. Pero gracias al apoyo solidario que tuvimos de tanta gente, aquí estamos de nuevo.”

“Todos aquí le entramos al asunto de la defensa de la tierra, de nuestra vida, de nuestro mundo – dice Ignacio – y nos sentimos plenamente orgullosos de cada hermano, de cada compañera. Esto es lo que somos, lo que valoramos y no estamos dispuestos a tener que pedir nuestra libertad como una dádiva.”

CONAGUA: una amenaza latente

A pesar del triunfo que la liberación de los presos representa, el gobierno no ha abandonado la idea de construir un aeropuerto en territorio mexiquense. Al asumir la presidencia de México en 2006, Felipe Calderón advirtió que en su sexenio se lograría, por fin, construir el nuevo aeropuerto, pero “únicamente en territorio federal”.

A principios de 2009, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), utilizando como pretexto un programa llamado “Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco”, adquirió 600 hectáreas de las 2 mil que pretendía para llevar a cabo el supuesto rescate.

Al respecto, comenta Del Valle: “El proyecto de la CONAGUA es lo mismo, pero ahora inciden en las comunidades de otra forma; engañan a la gente diciéndole que ‘ya no va a hacerse el aeropuerto, pero aquí está el apoyo, hay proyectos productivos del campo y todo esto tiene que ser una zona ecológica, la tenemos que proteger’.”

Algunos comuneros de las localidades de Nexquipayac e Ixtapan – situadas en el municipio de Atenco – vendieron ya sus parcelas a la CONAGUA. De esta manera, planean cambiar el uso de suelo para convertir esas tierras en territorio federal. “El miedo hizo su función en algunas poblaciones – explica Del Valle –, la represión cumplió un objetivo, envié un mensaje al pueblo: no se



TEHUANTEPEC, 1985

sigan defendiendo, no se sigan oponiendo a los proyectos del gobierno porque miren lo que les puede pasar.”

Ignacio del Valle refiere que es a través de incentivos y programas para “reactivar el campo” como la CONAGUA ha logrado hacerse de algunas hectáreas para convertirlas en territorio federal. “En Ixtapan son ganaderos y necesitan del campo. Ésa es su forma de vida. Y nos preguntamos ¿cómo es posible que a ellos los hayan convencido? Desde luego que el trabajo ha sido de mucho tiempo por parte del gobierno: los ha absorbido, los ha hecho depender. Resulta que mientras nosotros estábamos en el fragor de la batalla, a ellos les estaban dando presupuesto, las ayudas llegaban a ese lugar”, refiere Del Valle y advierte que “el gobierno está entrando por lo más sutil, pero ya lo detectamos y estamos en alerta, informándole a los compañeros: ‘¡Cuidado!, nos están ayudando por ahí, pero el fin es sorprendernos nuevamente con el proyecto del aeropuerto’. Quieren convencer a la gente, penetrar en los pueblos.”

El constante acoso

“Un proyecto neoliberal de enormes dimensiones es lo que no les permitimos realizar en 2001 – explica Marta Pérez, otra integrante del FPDT –. Tenían ya un diseño que transformaba totalmente nuestro territorio con carreteras, corredores industriales y turísticos, nuevas zonas habitacionales e incluso ferrovías que rodearían toda el área, pues este aeropuerto estaba destinado a ser el centro de operaciones del Plan Puebla-Panamá; iba a ser un aeropuerto de carga y descarga de maquinaria y de materias primas.”

“Por haberles impedido – continúa Marta – realizar sus sueños de grandeza y de poderío político y económico, lo pagamos con la represión del 2006 y con el acoso que vivimos día con día, pues actualmente siguen sobrevolando este territorio helicópteros de la policía y del ejército, lo cual nos

indica que aún tienen la idea de construir su aeropuerto en nuestras tierras.”

La construcción del aeropuerto no sólo significaría un cambio radical en la forma de vida de quienes habitan en este municipio del Estado de México, sino que representaría – como advierte Marta Pérez – “la pérdida de un centro de equilibrio ecológico, pues Atenco, por estar ubicado en la superficie del ex lago de Texcoco, funciona como un vaso receptor de aguas de lluvia, que, si no tienen a dónde ir, incrementarían el riesgo de inundaciones en Atenco e incluso en la Ciudad de México.”

Las victorias de Atenco

A pesar de la tensión, la adversidad y la incertidumbre, los hombres y mujeres de Atenco tienen sus ojos y sus manos en el campo y eso significa, por sí mismo, una victoria. “Hay que lograr que nuestros jóvenes amen el campo, pues esa es una forma de resistencia”, dice Ignacio del Valle y continúa: “Una de las formas inmediatas para seguir con la defensa de la tierra es sembrándola.”

No obstante la represión que ha padecido, el pueblo de Atenco ha sabido defender con dignidad su territorio desde que surgió la amenaza de perder las tierras en el 2001, y durante todo este tiempo, han saboreado más de una vez las mieles del triunfo. Por ejemplo en 2002, cuando lograron echar abajo el decreto expropiatorio y se dio por cancelado el proyecto del aeropuerto o hace poco más de un mes cuando sus 12 presos y los 2 perseguidos políticos obtuvieron la libertad.

El FPDT ha conquistado otras batallas, quizá menos conocidas, pero igualmente meritorias y enfocadas – como la lucha por la tierra – a la construcción de un mundo más digno. Un claro ejemplo es el proyecto educativo del Frente, que consiste en la impartición de un curso gratuito para ingresar al nivel medio superior, pues, como comenta Alberto Alonso Sarmiento, uno de los

encargados del proyecto, “en México tenemos un problema muy grave entre el nivel básico y el superior y por eso decidimos abrir este curso, no sólo para habitantes de Atenco, sino para gente de toda la región y los municipios aledaños.” Satisfecho, Alonso Sarmiento comparte los resultados: “Este año, de 25 compañeros que nos acompañaron en el curso 10 se quedaron en la UNAM, 2 en el IPN y 11 compañeros lograron su primera o segunda opción en escuelas de la región”.

Respecto a los nuevos proyectos y a los cambios que ha habido en el FPDT, Ignacio del Valle comenta: “Cuando llegué, me llevé una sorpresa muy agradable con la iniciativa de los nuevos compañeros. Ya Ignacio no es el hombre orquesta que corre para acá y para allá, que el templete, que los cañones, que los camiones, que las mantas, que todo eso. Ahora todos van tomando su participación, su comisión y eso es algo muy importante. Sobre todo las mujeres: las he escuchado hablar en las reuniones en las que he estado y su participación es muy buena, totalmente específica al tema; no divagan. Entonces creo que hubo un salto cualitativo en la conciencia de la gente y en su participación”.

“Ahí encontré al humano, no al criminal”

Ignacio del Valle relata que durante los más de 4 años que estuvo injustamente preso en el penal del Altiplano, aprendió a ver a sus compañeros más allá de lo “estrictamente criminal”. Del Valle explica que allí dentro “los llegas a ver como una familia. Ahí encontré al humano, no al criminal, gente de alto nivel delictivo que me decía ‘ánimo no te agüites, todos te brindamos apoyo’”.

“En alguna ocasión – recuerda Ignacio – no me depositaron dinero en mi cuenta y ese mes no tuve para comprar en la tienda del penal. Pero mis compañeros, utilizando un sistema de repartición de objetos llamado *la telaraña*, me hicieron llegar chocolates, galletas e incluso una carta a pesar de las cámaras de seguridad y los custodios que continuamente nos vigilaban”.

En el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, donde Ignacio y otros 2 miembros del FPDT estuvieron reclusos, el reglamento indica que los presos tienen derecho a estar una hora al día en el patio, tomando el sol. Sin embargo, ese hecho tan común se convertía en un pretexto más para golpearlos anímicamente: “Salíamos sólo 5 minutos al patio, el reglamento dice que nos tocaba una hora, pero si nos veían sonreír, si veían que disfrutábamos un poco, nos metían.” La consigna era tenerme bien vigilado, minándome física y emocionalmente”.

Pero no lograron derrocarlo, y, según comentó Del Valle en una entrevista antes de salir libre “los barrotes no lograron aniquilar nuestro espíritu, pues nos hemos forjado como los machetes, que a fuerza de golpes, se les saca filo”.

El FPDT, en pie de lucha

A pesar de haber logrado la liberación de sus 12 presos y la cancelación de las órdenes de aprehensión de sus 2 perseguidos, los atenquenses y el FPDT siguen en pie de lucha, pues el proyecto del aeropuerto está latente y “no podemos estar totalmente tranquilos”, explica Del Valle.

“Ésos, a quienes los medios de comunicación llaman ‘los macheteros’, son nuestra gente: un mecánico, un ama de casa, un viejo sentado que acaricia en sus sueños el futuro de sus nietos. Y esos sueños, no están en venta. Nuestra dignidad no tiene precio”.

Ignacio del Valle asegura que los atenquenses han comprendido que “la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Es como una madre, y la madre no se vende,” y finaliza: “Este viento, este lodo, esta luz y estas flores que para otro pudieran parecer insignificantes, para nosotros lo son todo y estamos dispuestos a defender, incluso con la vida, lo que nos pertenece”.



En el corazón el hambre

DESIERTO DE SONORA, 1979

Martín Espada

Contrabandeados en furgones a través de campos sembrados de un amanecer oscuro, atados como bultos en el cruce de los ferrocarriles, los rostros morenos diluidos en la penumbra de las terminales de camiones, migrantes: mexicano, dominicano, guatemalteco, puertorriqueño huérfanos y viajeros, los que les niegan permiso para usar los baños en las gasolineras, golpeados a cambio de una cerveza en pueblos invisibles adornados por balcones blancos, o evaporados sin lápida en el pasto adormecido.

Un ciempiés de manos en movimiento manos arrojando el llanto de sus bebés, dedos al crucifijo, manos que labran.

Mucho más allá de caminos perdidos pavimentados por la soledad, miles de manos escarban juntas los sembradíos, las raíces incontables de un árbol arrancado por un rayo, venas capilares convergiendo hacia el corazón del hambre, los que pizcan tábaco, pizca-uvas, pizca-lechugas, oscurecidos entre nubes blancas altas como torres en las ciudades del invierno, miles le hacen venias a las líneas de producción, entre el frenesí de cocinas y talleres del sudor, limpiando el vómito de niños ajenos, inclinados ante el vapor del hierro y el brillo de la fábrica de acero.

Y sin embargo hay un peregrinaje, una historia estirando sus armas y piernas, un empeño inexorable, gritando en español a los policías municipales y puntos de revisión en la frontera, mexicano, dominicano, guatemalteco, puertorriqueño, pescadores vadeando en las aguas de la penumbra estadounidense para rescatar una vida feroz, jadeante de la corriente contaminada.

Martín Espada. Nacido en 1957 en Brooklyn, Nueva York, pasó de ser abogado de inquilinos a “el poeta latino de su generación” en Estados Unidos, donde su obra es ampliamente reconocida. Inmune al estereotipo, su obra como poeta, traductor, ensayista y editor es significativa. Ha publicado 17 libros, a lo que se habrán de sumar *The Trouble Ball* (poesía, Norton, 2011) y *The Lover of a Subversive is Also a Subversive* (ensayos, Michigan, 2010). Enseña en la universidad de Massachusetts-Amherst. **Traducción de Camilo Pérez Bustillo**

Guardianes de los alimentos

Las crisis financiera, energética, ambiental, climática, tecnológica, jurídica y alimentaria se potencian. Las grandes corporaciones se posicionan en todos los segmentos de la cadena alimentaria e instauran un llamado “sistema alimentario global”: acaparan tierra y semillas, fabrican insumos, cosechan, cultivan, almacenan, procesan, transportan y transforman comercializando finalmente al menudeo alimentos empacados o listos para servirse. A nivel oficial, insisten en que por primera vez la mitad del mundo vive en las urbes y pronto, con la ayuda de organismos internacionales, habrá un 75 por ciento urbano.

En un momento así, y cuando los falsos remedios intentan perpetuar que las grandes corporaciones sigan haciendo negocios pase lo que pase, es ilustrativo un documento del Grupo ETC que formula una cuestión vital: quién habrá de alimentarnos, quiénes en verdad son los guardianes de los alimentos en el mundo. La respuesta es sorpresivamente esperanzadora. Pese a que en los censos los indígenas y los campesinos están subestimados o escondidos en categorizaciones académicas o políticas que no los representan, por lo menos 1 500 millones de personas (en el más conservador escenario) producen sus propios alimentos, guardan e intercambian semillas nativas desde tiempos inmemoriales.

Cerca de un 85 por ciento de los alimentos producidos se consumen en la misma región ecológica, fuera del llamado “sistema alimentario mundial”, lo que significa que el mundo se alimenta de los campesinos independientes.

Esto, si consideramos únicamente a los agricultores más visibles. Aquellos que producen sus propios alimentos pueden sumar los 3 mil millones si se incluye a campesinos cultivadores (muchos de ellos indígenas), pastores (sedentarios y nómadas), productores pecuarios campesinos, cazadores, pescadores artesanales, recolectores y cosechadores de agua. El recuento es difícil porque varias de esas actividades son laboradas conjuntamente por el mismo núcleo de personas, familias o comunidades en diversas temporadas y sin que sean visibles estas actividades cotidianas.

Se podría incluir a unos 800 millones de personas que cultivan sus propios alimentos en las ciudades (azoteas, patios, huertos y terrenos comunitarios urbanos), pero de nuevo, es difusa la cuenta porque muchos van y vienen entre el campo y la ciudad.

Si este enorme grupo de personas y comunidades alimenta al mundo pese a la poca tierra con que cuenta (por eso exige a nivel mundial una urgente reforma agraria integral y un alto al acaparamiento corporativo), ¿por qué no aparece en la percepción general? ¿Por qué las políticas públicas internacionales y nacionales, las grandes iniciativas como la Revolución Verde y ahora AGRA, se empeñan en desacreditar a los campesinos, y criminalizar sus semillas nativas y saberes con leyes que atenatan contra 10 mil años de agricultura campesina?

Al sistema alimentario mundial le es indispensable “terminar con la producción independiente de alimentos, terminar con las semillas independientes no controladas por las grandes corporaciones y la posibilidad de autonomía de las comunidades”.

Hacerlo implica leyes y políticas nocivas y un control difícil de implementar cuando millones de personas no quieren pedir permiso para ser quienes son y producir alimentos resistiendo en las márgenes del sistema. Dice Camila Montecinos: “Si la comida que producen los pueblos campesinos e indígenas fuese marginal, no se necesitarían estas leyes, dejarían que las comunidades campesinas e indígenas murieran por sí solas. La intensidad del ataque tiene que ver con la importancia de lo que todavía mantienen en sus manos las comunidades. Hoy es más importante que nunca mantener las semillas propias y los sistemas colectivos que permiten que esa semilla se mantenga viva y caminando”.

Ojarasca

Ver Grupo ETC, “Quién nos alimentará”, www.etcgroup.org, y GRAIN, “Leyes para acabar con la agricultura independiente”, *Biodiversidad, sustento y culturas*, número 64, abril de 2010.

En Belice también hace aire Reconocen derechos ancestrales de los mayas

Las comunidades mayas del sur de Belice obtuvieron una nueva victoria en el Tribunal Supremo de Justicia con la sentencia del Juez Abdulai Conteh emitida el lunes 28 de junio. La sentencia reconoce los derechos de tierras de todas las comunidades mayas del distrito de Toledo.

La nueva sentencia es la tercera victoria jurídica maya en Belice. La primera fue el informe de fondo de la Comisión Interamericana, en 2004, que avanzó en el establecimiento de un estándar respecto a los derechos de propiedad sobre tierras y recursos indígenas, bajo la Convención Americana de Derechos Humanos.

La segunda victoria maya ocurrió en 2007, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Belice acogió la demanda de dos comunidades mayas que reclamaban sus derechos sobre las tierras, tras el incumplimiento del gobierno de las recomendaciones de la CIDH. Dicha sentencia fue la primera ocasión en que un tribunal aplicó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Aquella sentencia de 2007, pese a ser favorable a los mayas, fue interpretada estrechamente por el gobierno de Belice, que consideró que sólo era aplicable a las dos comunidades demandantes, excluyendo a las restantes.



JUCHITÁN, 1979

La nueva sentencia viene a completar el cuadro y acoge la demanda planteada por el conjunto de comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belice, representadas por sus dirigentes, la Asociación de Alcaldes Mayas y la Alianza de Líderes Mayas.

Ambas sentencias, 2007 y 2010, reconocen los derechos de propiedad de las comunidades mayas sobre las tierras que han ocupado, basados en el derecho consuetudinario maya. Y ambas sentencias ordenan al gobierno demarcar y titular las tierras acuerdo a la costumbre y prácticas mayas, y que el Estado debe abstenerse de realizar por sí o tolerar de terceros actos que afecten esa propiedad.

Lo que estaba en juego son los derechos sobre más de 500 mil hectáreas de tierras ancestrales mayas, y los intereses en concesiones petroleras, forestales e hidroeléctricas que el gobierno había otorgado, sin consulta ni consentimiento.

La sentencia del 28 de junio obliga al gobierno de Belice a poner freno a cualquier arrendamiento, donación, concesión y contratos que afecten los derechos de las tierras mayas en el Distrito de Toledo.

Información del Centro de Políticas Públicas (CEPPP)

“Expulsan” a USAID de la Amazonía boliviana

Los alcaldes de los municipios en el departamento autónomo de Pando, en la Amazonía boliviana, decidieron expulsar a ONG's, fundaciones y empresas que operan en su territorio con financiamiento de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID), pues “generan conflictos internos, interfiriendo en nuestro proceso histórico de liberación nacional para socavar la legitimidad democrática de nuestro gobierno”, reza un pronunciamiento de las autoridades municipales de la región, fronteriza con Brasil y Perú, el 6 de julio.

Según informó la Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia (AINI), tras comprobarse que funcionarios “pagados por USAID intentaron provocar un cisma en el movimiento indígena enfrentando a las organizaciones de la Amazonia con el gobierno”, los alcaldes de Pando decidieron expulsar de sus jurisdicciones “a ONG's, empresas, agencias y proyectos financiados a través de USAID y sus aliados, para acabar con la impostura de los traficantes internacionales del medio ambiente, poner fin a las maniobras

del gobierno de Estados Unidos en territorio amazónico y liberarnos de las prácticas prebendales impuestas por esta perversa ‘cooperación’ cuyos míseros centavos envilecieron la conciencia de nuestros pueblos, de sus campesinos y nuestras representaciones indígenas”.

Entre los organismos que deben abandonar el territorio autónomo figuran Conservation Strategy Fund (CSF), Herencia, Puma, WCS Rainforest Alliance y Armonía, a las cuales se exige informar sobre sus actividades y el origen de su financiamiento, además de los montos recibidos en los últimos 10 años y los resultados logrados hasta la fecha. “En caso contrario nos veremos obligados a someterlos, en el marco de la nueva Constitución Política, a los tribunales por vulnerar nuestra autonomía y atentar contra nuestra soberanía territorial e institucional”, advierte el pronunciamiento de la Asociación de Municipios de Pando.

Allí se explica que mediante programas como “Madre de Dios, Acre y Pando” y la Iniciativa de la Cuenca Amazónica, “USAID y sus ONG's han convertido a Pando en territorio enajenado e intervenido”. Diciendo “luchar contra la pobreza, por la preservación del medio ambiente con enfoque capitalista, y con programas racistas” como Protección de Paisajes Indígenas, suplantando a la autoridad autónoma “e intervienen políticamente haciendo circular clandestinamente millones de dólares en las comunidades para enfrentar al pueblo con su propio gobierno”, buscando desestabilizar al régimen de Evo Morales.

El llamado oficialmente “manejo efectivo de la diversidad biológica y los servicios ambientales”, agrega el documento, divulgado por Datos y Análisis, “es un pretexto para trasnacionalizar nuestros recursos naturales, intervenir las organizaciones sociales y alinearlas con los intereses del imperio.” En el marco del nuevo régimen autonómico boliviano establecido en la Constitución Política, los municipios declararon a Pando “territorio amazónico libre de USAID”.

Éstos apoyan la decisión del presidente Morales, “oficializada a fines de 2008”, de expulsar definitivamente a la agencia estadounidense: “Será un gesto histórico, soberano y ejemplar.” Las autoridades comunales advierten que ninguna ONG, fundación nacional o extranjera, empresa o proyecto podrá intervenir en su territorio sin autorización de los alcaldes y sus concejos municipales.

Pando, al norte de de Bolivia en la cuenca del gran Amazonas, incluye 5 provincias, 15 municipios y 51 cantones. Es uno de los territorios más ricos en biodiversidad y donde se halla la mayor cantidad de tierras fiscales disponibles para ser distribuidas entre indígenas y campesinos sin tierra que llegan de otros confines del país, en un proceso que presuntamente intentó ser revertido por la ingerencia estadounidense “y los latifundistas que propiciaron la masacre indígena del 11 de septiembre del 2008 en el municipio de Porvenir”.

Según otras fuentes, la amenaza de Evo Morales contra USAID es sólo eso. Un vocero de la embajada de Estados Unidos, cuestionado a propósito de esa declaración de los alcaldes pandinos, dijo a *La Jornada* en La Paz “que no emitirá comentario hasta recibir un pronunciamiento oficial del gobierno de Bolivia”. O sea, sigue en veremos la “oficialización” por parte del gobierno que los alcaldes de Pando dan por hecho.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) sostiene que el propio gobierno boliviano “recibe cooperación de USAID”. Eso, independientemente de que CIDOB y CEJIS niegan recibir financiamiento de USAID, como los acusó el gobierno. Se dice en Bolivia que ahora todo aquel que se opone a que le atropellen sus derechos y resiste las acciones autoritarias del gobierno, según los oficialistas es “manipulado por la derecha” o “financiado por USAID”.

En tanto, los cocaleros mantienen conflictos con pueblos indígenas del trópico a los que invaden sus tierras. Si alguien ha hecho tierra arrasada en parques forestales son los cocaleros. Los Yungas, por ejemplo, producían cítricos; ahora los ambientalistas se quejan de que “sólo se ven cocales”.

Las presiones son fuertes. El director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, declaró hace un par de meses que por las “excesivas exigencias” de los indígenas, las compañías petroleras no cumplen con las inversiones comprometidas. En tanto, el gobierno planea exportar electricidad a Brasil, mediante megaproyectos hidroeléctricos a los que se oponen varios pueblos amazónicos. De éstos, el gobierno dice, claro, que son “manipulados” por ONG's “financiadas por USAID”.

Ojarasca

En Bolivia

Los 300 kilómetros de una victoria

Rosa Rojas, La Paz. Entre el 21 de junio, cuando partió de la ciudad de Trinidad, en el nortño departamento del Beni, la séptima marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por el territorio y las autonomías indígenas, y el 23 de julio, cuando la movilización entró en un cuarto intermedio, esta organización y el gobierno del presidente Evo Morales libraron una desigual y encarnizada batalla verbal.

Todo el aparato de comunicación estatal — Canal 7, Radio Patria Nueva y sus repetidoras, el diario estatal *Cambio*, spots en televisoras y radios comerciales, notas en diarios nacionales y regionales— reproducían declaraciones de funcionarios, destacadamente del ministro de Autonomías Carlos Romero, en el sentido de que la marcha no tenía razón de ser porque las propuestas de la CIDOB ya estaban incluidas en el proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Asimismo el gobierno argumentaba que algunas de las demandas de la CIDOB eran “anticonstitucionales”, “ilegales”, “irracionales” e incluso “discriminatorias” en contra de los derechos del resto de los bolivianos. Para peor, decían que la marcha era “manipulada por la derecha”, organizaciones no gubernamentales y financiada por USAID (la agencia de Estados Unidos para la ayuda en el exterior).

Una de las ONG's así satanizada es el CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), que durante muchos años ha asesorado a la CIDOB, y de la cual fue director el propio ministro Romero. Iván Bascopé, responsable regional en La Paz que dio seguimiento a las negociaciones de CIDOB con el gobierno, afirmó a *Ojarasca*: “Jamás hemos tenido financiamiento de USAID (...) Hemos sido gente proactiva del proceso de cambio”.

La marcha de la CIDOB, en penoso avance que se agravó porque las últimas dos semanas enfrentó un surazo helado, ya en el departamento de Santa Cruz, recibía a su vez una modesta cobertura mediática, a veces limitada al revire de las acusaciones del día en su contra, la reiteración de la justicia de sus demandas y fotos de los indígenas con arcos y flechas.

La marcha partió con unos 700 chimanes, ayoreas, chiquitanas, movimas, moxeñas, mosetenes, guaraníes, a los que se fueron sumando más, hasta llegar a unas mil 400 en los casi 300 kilómetros que recorrió rumbo a La Paz. Sus demandas incluían 13 puntos, entre ellos la conclusión del saneamiento (regularización) y titulación de todos los territorios comunitarios de origen (TCO), así como “el desalojo de los terceros ilegales en nuestros territorios”.

Exigían al gobierno garantizar que la categoría de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) “en ningún caso implique o se interprete como copropiedad indígena y campesina sobre las TCO, teniendo éstas como únicos titulares a los PI

que los demandaron”.

Asimismo demandaban “para garantizar el derecho de los PI a la integralidad” de sus territorios, “la inmediata reversión y expropiación de tierras y la dotación de todas las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar que no tienen tierra y los que las tienen insuficientemente”.

Exigían “la nulidad de las concesiones forestales, mineras y otras que afectan a los PI en su territorio”.

Asimismo, garantizar el acceso de todos los pueblos a la autonomía “sin límite del número de habitantes y medición de capacidades”, debiendo respetarse la aplicación de normas propias en la implementación de las autonomías indígenas (AI) “y no imponernos el referéndum como medio de decisión”.

También “respetar a los TI consolidados como unidades territoriales para acceder a la AI sin derivarlos a una ley para que determine una nueva delimitación con la jurisdicción de los municipios” y la obligación del Estado de garantizar recursos económicos a las autonomías indígenas.

Además el respeto al derecho a la consulta que tienen los pueblos, incluidos “todos los anteproyectos de ley de interés de los pueblos indígenas” y la elaboración de una Ley del Derecho de Consulta.

Exigían que “en todas las estructuras del gobierno plurinacional se designen autoridades provenientes de los pueblos indígenas propuestos a través de la CIDOB y sus organizaciones regionales”.

Entre el 3 y 4 de julio, una comisión de senadores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) acordó con los marchistas incluir en el proyecto de LMA las propuestas de la CIDOB.

El 7 de julio, reunidos en el palacio de gobierno con el vicepresidente Alvaro García Linares, dirigentes de las confederaciones de Campesinos (CSTUCB), Mujeres Indígenas (Bartolinas), Comunidades Interculturales y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, integrantes del Pacto de Unidad en el que participa la CIDOB, en un manifiesto pidieron a los marchistas “no dejarse manipular por algunos dirigentes de la derecha” y les pedían suspender la marcha.

Entre el 18 y el 20 de julio, dirigentes de la CIDOB y funcionarios lograron un acuerdo en el que el gobierno comprometió 6 mil 500 millones de dólares para el saneamiento de tierras, un cronograma para diversas TCOs, asesoría para otorgar recursos para la gestión territorial indígena y cre-



JANCO QUINCHU, MEXICO, 1980



OAXACA, 1974

Los misak de Colombia

en movimiento

El 27 de abril pasado, uno de los más activos grupos paramilitares (las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC), amenazó a la Autoridad del pueblo misak de la zona del Cauca en Colombia en un comunicado donde conminaban a los líderes a “dejar de lado el discurso y los hechos arcaicos a favor de los derechos indígenas” declarando objetivo militar a dos gobernadores, once mamás, cuatro comunicadores y diecinueve taitas. (Ver *Ojarasca* 157, mayo).

Ante la amenaza, el pueblo misak (o guambiano) no sólo no se achicó sino que decidió salir al paso de esta amenaza y emprendió la marcha Por la Dignidad y la Pervivencia de los Pueblos, la Nación Originaria Misak en Movimiento, que salió el 17 de julio de la ciudad de Wampia, en Cali y arribó a Bogotá, capital del país el 19. Ahí, la Autoridad Ancestral misak hizo público un documento, del que seleccionamos algunos pasajes que presentamos a continuación.

“Actualmente el capitalismo salvaje y las familias más poderosas que gobiernan nuestro país, con el modelo patriarcal heredado desde la invasión y con la colonización de los países desarrollados, basados en su lógica de “desarrollo”, “progreso” y acumulación desmedida, separan al ser humano de la madre tierra y establecen la explotación indiscriminada del agua, la tierra, las minas, el genoma humano, el oxígeno, los saberes ancestrales, las semillas y los cultivos propios, la biodiversidad, convirtiéndolo todo en mercancía y exponiendo todo en las vitrinas internacionales para venderlo al mejor postor, acelerando de esta manera la destrucción de los elementos más vitales que componen nuestro territorio y la madre naturaleza, y por ende la desaparición no solamente de los pueblos y naciones milenarias, sino también de todos los seres humanos, con el avasallamiento de todos sus derechos, la vida, la dignidad y las libertades.

[...] A estas justas luchas de los pueblos y las naciones, los gobiernos siempre han respondido de la peor manera, silenciándonos con la muerte, el genocidio, el etnocidio, las amenazas, el desplazamiento, la discriminación, la xenofobia, la censura, tal como lo están haciendo hoy con la política de “seguridad democrática”, criminalizando nuestra palabra, promulgando leyes que tienen como fin acabarnos. Las voces de nuestros pueblos y organizacio-

nes que movilizan a favor de los derechos humanos y de la vida, son perseguidas con la complicidad del gobierno colombiano, porque en este país quienes ejerzan el derecho a la disensión y a la oposición son catalogados objetivo militar.

“El proceso de generalización y profundización del conflicto armado en que se debate Colombia hoy se ha convertido en una guerra de dominio territorial por parte de los diferentes actores armados, produciendo la mayor parte de víctimas en la población civil, de la cual no escapamos los pueblos originarios, por medio de masacres, desplazamientos forzados, destrucción de poblados, violación de nuestro Derecho Mayor, de los derechos fundamentales de los pueblos y del derecho internacional humanitario.

“En este contexto de guerra emergemos los pueblos originarios que reclamamos y exigimos a los actores del conflicto armado el respeto a nuestros planes de pervivencia, al territorio, a nuestras autoridades, autonomía, identidad y cultura. Que no se nos involucre en el conflicto, como principio fundamental de resistencia de nuestros pueblos al aniquilamiento. Estas expresiones de autonomía de los pueblos originarios deben ser consideradas como experiencia de resistencia, no sólo justas sino válidas y entendidas como mecanismos de defensa no violenta ante cualquier forma de agresión que provenga, ya sea del Estado colombiano, del sistema capitalista, de los actores armados y de la sociedad mayoritaria. Por lo tanto reiteramos que los pueblos originarios hemos sido y seguimos siendo objeto de todo tipo de agresiones violentas y no violentas.

“Hoy nuestra lucha y nuestra posición política es independiente del Estado y el gobierno, y de los actores armados, porque esas confrontaciones no resuelven ni nos representan nada. No somos trofeos de guerra, ni de unos ni de otros. No permitimos que se nos exhiba como ganancias políticas de unos o de otros. Sabemos muy bien contra qué y contra quién tenemos que luchar, qué y a quién podemos apoyar.

“La nuestra es una *lucha por la vida, la dignidad, la libertad*, principalmente con el pensamiento propio, sin dejar de apoyar las luchas del pueblo colombiano, pues con mucha claridad hemos respaldado y respaldamos a los sectores populares del pueblo colombiano en sus luchas por sus derechos políticos y sociales”.

Tras el análisis (y con un recuento histórico muy recomendable para quien quiera entender un poco más la historia colombiana), el pueblo misak propone “la defensa de la autonomía y la soberanía de nuestros pueblos, de la madre naturaleza, de nuestros territorios y sus autoridades, la no violencia, y la construcción de políticas justas y la equidad para toda la sociedad mayoritaria colombiana”, lo cual se traduce en una defensa de los territorios como imprescriptibles, inalienables e inembargables; un NO a la concesión para explotar los recursos minerales y naturales, y a cualquier saqueo del subsuelo por parte de las transnacionales y multi-

los cobros de energía eléctrica y otros servicios públicos, entre otras reivindicaciones plasmadas en el documento completo.

El pueblo misak insiste: “todos debemos convertirnos en trabajadores y constructores incansables de la unidad entre los pueblos. Ante las amenazas de perder nuestros territorios y todos los derechos que hemos conquistado, estamos obligados a hacer a un lado los intereses personales, de grupo o de organización y poner por encima los intereses de nuestros pueblos, anteponiendo lo común que nos une.”

(ver www.pueblomisak.org)



PRIMER DIA DE VERANO. VERACRUZ, 1982. FOTOS: GRACIELA ITURBIDE

nacionales en alianza con el gobierno colombiano en esos territorios ancestrales; un NO a la privatización del agua, un NO a los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos; una defensa de las semillas y los cultivos ancestrales, de la biodiversidad, los conocimientos y saberes ancestrales (que son inalienables); un NO a los transgénicos y los monocultivos; un NO a la privatización o individualización de las comunidades agrarias; un NO a las contrarreformas de los derechos de los pueblos indígenas plasmados en la Constitución de 1991, a la intervención y al desquebrajamiento de la soberanía colombiana con la implantación de las bases militares extranjeras; un NO a la militarización de los territorios ancestrales y a

**página
fiscal**